

Medellín, nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Proceso        | <b>DECLARATIVO RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL</b>                        |
| Radicado       | <b>05001 31 03 022 2021 00210 01</b>                                        |
| Demandante     | <b>LINA MARIA MENA MAYA</b>                                                 |
| Demandada      | <b>CONSTRUCTORA INVERNORTE S.A.S. EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA</b> |
| Juzgado origen | <b>VEINTIDÓS CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN</b>                             |

Decide la Sala la apelación interpuesta frente al auto del 30 de julio de 2021, mediante el cual se rechazó la demanda de la referencia por falta de subsanación.

### 1. ANTECEDENTES.

Mediante auto del 2 de julio de 2021 el juzgado de origen inadmitió la demanda para que, entre otras, se subsanaran los defectos consistentes en: i) aportar constancia del intercambio de mensajes de datos mediante los cuales le fue conferido poder al abogado que presenta el líbello, así como incluir las pretensiones subsidiarias solicitadas, ii) presentar juramento estimatorio en los términos del artículo 206 del Código General del Proceso; iii) aportar constancia de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad; iv) acreditar el envío de la demanda, anexos y subsanación a la parte demandada en los términos del inciso 4 del artículo 6 del Decreto 806 de 2020.

La parte demandante presentó oportuno escrito subsanatorio, en el que frente al requisito de adecuar el poder allegó nuevo escrito<sup>1</sup>; frente al requisito de presentar juramento estimatorio, adicionó el acápite de la cuantía indicando el valor de las pretensiones y la naturaleza de las mismas; respecto de la constancia de haber agotado la conciliación prejudicial, indicó solicitar medida cautelar de inscripción de demanda y; finalmente, respecto del envío de la demanda, anexos y subsanación a la parte demandada, aportó constancia de envío al buzón electrónico del liquidador de la sociedad demandada y comprobante de envío físico<sup>2</sup>.

Mediante proveído del 30 de julio de 2021, el juzgado consideró que, entre otros requisitos de inadmisión, no se remedió la exigencia relacionada con el juramento estimatorio, pues pese a que se presentó en el escrito de subsanación, este no cumplió con lo exigido por la

<sup>1</sup> Cfr. Página 10 archivo “05Memorial20210712” expediente digital

<sup>2</sup> Cfr. Páginas 8 y 9 archivo “05Memorial20210712” expediente digital

norma procesal respecto del daño emergente, toda vez que se menciona una suma, pero no se discriminan los conceptos que componen dicho monto. También se tuvo por no subsanado el requisito de procedibilidad, en tanto se quiso obviar en la subsanación anunciando que se solicitaba la inscripción de la demanda en folio de matrícula inmobiliaria, más no se especificó ningún bien objeto de la medida y, si bien se individualizó en memorial allegado el 14 de julio de 2021, el término para subsanar la demanda se encontraba fenecido.

## **2. EL RECURSO.**

La parte demandante se opuso a lo resuelto mediante recurso de apelación, argumentando que los requisitos se subsanaron de forma oportuna y completa.

Mediante auto del 23 de agosto de 2021 el juzgado concedió la alzada en el efecto suspensivo, ordenando la remisión del expediente digital a esta corporación para lo pertinente.

## **3. CONSIDERACIONES.**

### **3.1 COMPETENCIA.**

Por disposición del artículo 321 del C.G.P., el recurso de apelación contra autos procede solamente en contra de aquellos que la misma norma relaciona o que precisan disposiciones especiales, listado taxativo dentro del que se encuentra el proveído atacado en el numeral 1.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

### **3.2 PROBLEMA JURÍDICO.**

Le corresponde a la Sala determinar si constituye causal de inadmisión y posterior rechazo: i) no discriminar los conceptos que componen los perjuicios solicitados, estimados al momento de presentar la demanda, en este caso el daño emergente y, ii) no aportar constancia de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad y si la medida cautelar, en la forma solicitada, exime del cumplimiento del requisito.

### **3.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS.**

### Juramento estimatorio y requisito de procedibilidad (normatividad y jurisprudencia).

El artículo 82 del CGP establece los requisitos que debe contener la demanda y el artículo 84 de la misma obra los documentos que deben acompañarse a la misma.

Así mismo, el artículo 90 prevé los casos de inadmisión de la demanda so pena de rechazo y en los numerales 6 y 7 dispone que ello acontece "*(c)uando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario*" y, "*(c)uando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad*", respectivamente.

Respecto del juramento estimatorio, el artículo 206 adjetivo prevé que las pretensiones de índole patrimonial relacionadas con el reconocimiento de una indemnización deben estimarse de manera razonada y juramentada, discriminando cada uno de sus conceptos, juramento que hará prueba de su monto mientras no sea objetado por la contraparte y que sólo se tendrá en cuenta la objeción que especifique la inexactitud atribuida a la estimación.

Por otra parte, en cuanto al requisito de procedibilidad en materia civil, el artículo 621 ibídem, que modificó el artículo 38 de la Ley 640 de 2001, establece la obligación de su agotamiento previo a acudir a la jurisdicción. A su vez, el parágrafo 1 del artículo 590 ibidem estipula uno de los eventos en los que se exonera a la parte de agotar dicho requisito, esto es, cuando se solicita la práctica de medidas cautelares.

Ahora bien, en torno a los precitados requisitos se han emitido pronunciamientos de índole jurisprudencial.

Respecto del juramento estimatorio se ha determinado que la exigencia del artículo 206 del CGP, en cuanto a que los valores reclamados deben discriminarse de manera razonada, implica que además de la enunciación de los mismos debe detallarse el origen del concepto con los respectivos cálculos, de tal manera que posibilite a la contraparte la objeción de la estimación y pueda igualmente precisar el yerro aludido:

*"... únicamente puede predicarse que se ha cumplido con el "juramento estimatorio" cuando se precisan los elementos cualitativos y cuantitativos que conllevaron al extremo activo*

*a fijar el alcance de sus aspiraciones económicas, pues de soslayarse tal especificidad se impediría a la contraparte ejercer su derecho de contradicción rebatiendo la valía demandada, por cuanto la comentada regla estatuye que "sólo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación", tarea que se torna de imposible cumplimiento si se desconoce el origen de la tasación a rebatir..."<sup>3</sup>.*

Con relación a la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, jurisprudencialmente se ha considerado como un trámite legítimo y eficaz para contribuir a que las partes conozcan todos los elementos que se ponen de presente para considerar un posible acuerdo sobre la controversia que ulteriormente será sometida ante la jurisdicción competente<sup>4</sup>. En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional<sup>5</sup> ha considerado que la institución y exigencia de dicho requisito persigue importantes fines, entre ellos: i) garantizar el acceso a la justicia, pues genera un espacio de resolución de conflictos de manera ágil y oportuna; ii) promover la participación ciudadana en la solución de sus controversias; iii) estimular la convivencia pacífica, como fin esencial del Estado; iv) facilitar la solución de los conflictos sin dilaciones injustificadas y; v) descongestionar los despachos judiciales.

Ahora bien, en lo tocante a la exoneración en el cumplimiento del requisito de procedibilidad ante la solicitud de medidas cautelares, en torno de la inteligencia del mencionado artículo 38 de la Ley 640 de 2001, acompasado con lo precisado en el parágrafo 1° del artículo 590 del Código General del Proceso, no basta la mera solicitud de medidas cautelares para la exoneración automática del agotamiento de la conciliación prejudicial, sino que se requiere que dicha medida proceda para el caso concreto. Tal interpretación armónica de las normas mencionadas frente a los fines perseguidos por la institución de la conciliación prejudicial ha sido prohibida, en repetidas oportunidades, por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sede constitucional<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de tutela de 20 de junio de 2019. Exp. No. 1100102030002019- 01807-00.

<sup>4</sup> Cfr. Sentencia SC 5512, 24 de abril de 2017. M.P.: Margarita Cabello Blanco

<sup>5</sup> Corte Constitucional sentencia C-1195 de 2001, sentencia C-222 de 2013, entre otras

<sup>6</sup> Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de tutela de 25 de agosto de 2014, Exp. No. 68001-22-13-000-2014-00160-01 y sentencia de tutela de 12 de mayo de 2004, Exp. No. 1100102030002004-0043500-01.

### 3.4 CASO EN CONCRETO.

Conforme a lo dispuesto en nuestro ordenamiento procesal el funcionario judicial cuenta con unos parámetros para admitir, inadmitir o rechazar la demanda, que debe observar sin modificar o sustituir, pues se trata de normas de orden público, conforme lo dispone el artículo 13 del CGP.

Respecto del juramento estimatorio, el artículo 206 del estatuto procesal fija reglas precisas para su formulación, las cuales guardan especial armonía con las finalidades que el legislador dispuso para esta figura procesal, tal como se vio en la jurisprudencia transcrita. La carga impuesta al interesado, de discriminar de manera razonada la indemnización reclamada y acreditar los montos, debe ser analizada de forma meticulosa por parte del juez de conocimiento, pues una vez formulado en consideración a la norma, constituye prueba autónoma del daño y cuantía, en caso de no ser objetada.

Luego, una debida precisión de los elementos cualitativos y cuantitativos objeto de los conceptos estimados bajo juramento, garantiza la debida defensa de la contraparte en caso de controversia y permite el ejercicio de la facultad oficiosa del funcionario judicial, quien puede decretar pruebas en caso de estimar alguna circunstancia de ilegalidad, colusión, fraude o injusticia. Tales actuaciones sólo serán posibles si se tiene conocimiento del cálculo y conceptos utilizados para la cuantificación, de tal manera que no haya lugar a confusiones o dudas, sino que esté debida y objetivamente plasmado el reclamo patrimonial.

En el presente asunto, comparte la Sala los argumentos en los cuales la *a quo* basó la conclusión en el sentido de que el juramento estimatorio no se había presentado en debida forma, pues nótese que al momento de subsanar la demanda el togado demandante indicó que estimaba el daño emergente en \$1'000.000, pero adicional a ello nada le dijo a la juez de primera instancia respecto de los conceptos y montos que componían dicho daño, puesto que únicamente se limitó a enunciarlo. Inclusive, si se realizara un análisis general de todo el escrito demandatorio, lo único que se dice de dicho daño emergente es que se compone de los gastos asumidos por concepto de "*...compra de certificados de libertad, copias, pasajes a efectos de suscribir formatos de escrituración, reclamaciones, certificados de representación legal, correos, etc...*" (Cfr. hecho octavo); pero nada se precisa respecto del monto individual de los mismos que conlleva a totalizar la suma pretendida. Así las cosas, es evidente que la parte no

cumplió el requisito formal exigido y con ello procedería el rechazo de la demanda.

Respecto requisito exigido en torno a la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, encuentra el despacho que en el escrito de demanda no fue solicitada medida cautelar alguna que permitiera su exoneración. De igual forma, una vez exigido el requisito por el despacho de primer grado, la parte demandante se limitó a decir que *"No se intentó conciliación previa, por lo que se solicita con la demanda medida cautelar inscripción de la demanda en el folio de matrícula."*; afirmación que se observa insuficiente para eximir del requisito de procedibilidad ya que, en los términos del inciso final del artículo 83 del CGP, era deber del peticionario de la medida, determinar *"...los bienes objeto de ellas, así como el lugar donde se encuentran"*. De lo cual se colige, que ni en el escrito de demanda, ni en el escrito subsanatorio, se hizo una solicitud debida de medidas cautelares, menos podría calificarse si era procedente. En razón de lo cual, considera la Sala que tampoco se cumplió el requisito exigido.

En consecuencia, como quiera que los requisitos exigidos en la inadmisión no se subsanaron de acuerdo con lo previsto en nuestro ordenamiento, la decisión de primera instancia se encuentra acertada, sin que sea necesario referirse a los restantes motivos de inadmisión por sustracción de materia, por lo que se confirmará la decisión, sin condena en costas por no haberse causado.

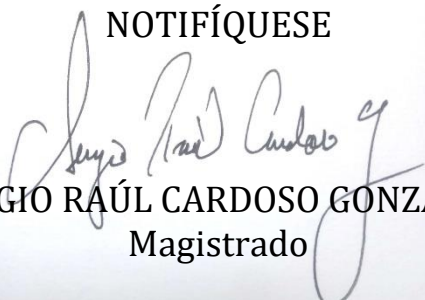
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

#### **4. RESUELVE.**

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada, sin condena en costas.

SEGUNDO: REMITIR el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ  
Magistrado